¿Contra las drogas o por las tierras?: la política prohibicionista de drogas como motor de despojo de tierras y destrucción de la biota en el sur de Colombia

Dra. Estefanía Ciro Rodríguez.
Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana
AlaOrillaDelRío
9 de Octubre 2018

La crítica a la política prohibicionista de drogas ha resaltado cómo esta multiplica los riesgos de los consumidores a la hora de acceder a las sustancias (Pérez Correa & Youngers 2014), los efectos negativos sobre diversas poblaciones dada la falta de proporcionalidad de penas (Lai 2012), cómo esta reproduce la vulnerabilidad, el maltrato y dependencia económica que enfrentan las poblaciones que cultivan las plantas de coca o amapola (Ciro, 2016) y los daños sociales debido a la violencia desatada (Froylán 2016; Silva Forné, Pérez Correa y Gutiérrez Rivas, 2012; Ciro 2018). La criminalización y estigmatización sobre los extremos de la cadena de la economía de las drogas – consumidores y productores- produce enorme violencia, daños en la salud y despojo. Poco menos se ha discutido el efecto de esta política en la biota y ecologías de extensas regiones de nuestro continente, que resulta de esta relación entre prohibicionismo y drogas.

Tal vez por su carácter ilegal, la economía de las drogas suele asumirse como una actividad externa al sistema capitalista, anexa a las dinámicas del capital y no como -lo que realmente es- una actividad económica central para la reproducción del capital y para la superación de las contradicciones del propio sistema en el siglo XXI. Como uno de los *ajustes espacio-temporales* que señala David Harvey (2004), la inversión en negocios ilegales son sumamente útiles para movilizar el capital. Hay una creciente preocupación por los riesgos existenciales que representan esta expansión de las relaciones de capital que consumen ecosistemas y poblaciones enteras y que no muestra ningún cambio de tendencia para suponer una desaceleración a la destrucción

o su reversión (Ceballos, Ehrlich & Dirzo, 2017; Ceballos, Ehrlich, Barnosky, García, Pringre & Palmer, 2015).

La deforestación se ha convertido en el tema central en torno a la gobernanza de los territorios de la alti-llanura amazónica, piedemonte andino-amazónico y la Amazonía colombiana. Ha recibido no solo la atención de los países cooperantes en el proceso de paz en Colombia sino también los fondos para múltiples estrategias que reciben *ongs* o actores externos a la Amazonia, y que no tocan ni los bolsillos, ni las organizaciones sociales o comunidades locales[1].

En los medios de comunicación de Colombia se reprodujo la idea de que la deforestación se causó a raíz de la salida de las FARC de los territorios, dado el control territorial que ejercían en ciertas regiones (Arenas & Vélez, 2017) (Vélez, 2018). Este argumento permitía insistir en mostrar el autoritarismo y dominación territorial, omitiendo las relaciones que establecían con las comunidades y la amenaza que suponían para la inversión privada. Esto desviaba la atención también a procesos más amplios como el acaparamiento de tierras, que venía desde el Plan Colombia o el interés del gobierno de incentivar una colonización amazónica que reprodujera la vulnerabilidad de las familias campesinas para quedar a merced del gran capital. Para estos sectores, los causantes de esta deforestación son las disidencias, los cultivos de coca y la ambición desaforada de las familias campesinas que, aparentemente, solo podían controlar las FARC. Pero el problema es más complicado, y se confunden muchas veces las causas con las consecuencias.

Este texto ofrece pistas para la discusión de cómo la política prohibicionista de drogas se relaciona con las formas desiguales de acceso y uso de la tierra en el sur de Colombia y crea incentivos para la destrucción de selvas o bosques en la Amazonia colombiana. Se propone en hacer una reflexión sobre la situación particular que enfrenta Colombia desde la implementación del Plan Colombia y ahora en el extractivismo que se experimenta en "épocas de paz"- denominado en este texto como *Pos-Plan*

[1] La delimitación del Parque Natural de el Chiribiquete como patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO en el 2018 ha atraído una enorme cantidad de ambientalistas, organizaciones y fundaciones externas a la región para el manejo de fondos de estrategias de gobernanza ambiental. La población local

Colombia- aproximándose al estudio de los cuatro departamentos que albergan los principales territorios cocaleros del país y que se ubican en el sur del país: Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta y Nariño. Son territorios que han sido priorizados por la política anti-narcóticos y anti-insurgentes del Plan Colombia y del pos-Plan Colombia.

Capital, tierras y narcotráfico

Las investigaciones han mostrado un traslape entre la economía de las drogas, el acaparamiento de tierras y el fenómeno de la deforestación, particularmente en Centroamérica, y muestran cómo la política prohibicionista de drogas es sumamente eficiente en crear un narcotraficante audaz para captar recursos y ambicioso de tierra (McSweeney, et al., 2014). Paradójicamente, entre más los criminaliza, más los vuelve excesivamente ricos.

McSweeney, Richani et all, señalan que los narcotraficantes son claves para explicar la transformación del paisaje en áreas rurales, por ejemplo, en el paso de la pequeña producción hacia agro-negocios, expansión de inversiones en energía, en extracción de maderas, minerales o petróleo y otras formas de *ajustes espacio temporales* del sistema capitalista (McSweeney, Richani, Pearson, Devine, & Wrathall, 2017). Para esto ocurre la formación de una *narcoburguersía* que usa las ganancias capturadas en el mercado de las drogas para extender la propiedad privada, lo que va acompañado de procesos de despojo de tierras protegidas o comunales. En un sistema capitalista que favorece las ganancias del sector privado- que necesariamente no excluye al sector considerado *ilegal*- la oportunidad económica e inversión de estos recursos solo tiene de impedimento lo que denominamos coloquialmente como el *lavado de activos*[2].

Los motivos para acumular tierra y transformarla pueden ser la necesidad de facilitar la logística del negocio ilegal, por ejemplo, al impedir que otros actores disputen el territorio y al movilizar mercancía sin problemas.

[2] Para entender el papel de las economías ilegales en la sociedad, es importante apuntalar que es necesario problematizar las dicotomías ilegal/legal o público/ privado en el funcionamiento del estado del siglo XXI. Para esto nos basamos en los textos de Beatrice Hibou (2013) y Matías Dewey (2015).

También se le agrega que permite asegurar una forma “legítima” de obtener bienes legales, por medio de colonizaciones y leyes de posesión de tierras, permitir el lavado de dinero, con transacciones que no están bajo estricto control en las zonas rurales, y que incluye también el pago a campesinos que no implican contratos estrictos y rigurosos. También, otra de las razones por las cuales la *narcoburguesía* encuentra en la tierra una opción es que es una inversión que promete la valorización de la tierra y es un camino hacia el poder político (McSweeney, Richani, Pearson, Devine, & Wrathall, 2017).

El paquete de apropiación de tierras incluye establecer sistema corrupto de registro de tierras, establecer coerción financiera o física contra campesinos e indígenas, deslegitimar las luchas políticas de los pobladores, aumentar la conectividad en ecosistemas frágiles y proveer un pretexto para la militarización del estado de estos espacios rurales. Según los autores, entre 1978 y 1988, la *narcoburguesía* gastó 5.5 billones de dólares para comprar un millón de hectáreas en la Amazonia, y en 1998, la adquisición de tierras llegó a 5 o 6 millones de hectáreas. (McSweeney, Richani, Pearson, Devine, & Wrathall, 2017). La ganadería, la expansión industrial en lo rural y la presencia militar en las tierras son herramientas del acaparamiento de la *narcoburguesía* de tierras, como ha ocurrido en Petén, Guatemala.

El eslabón del tráfico se beneficia a través de la compra – barata y violenta- de tierras. ¿Qué ocurre en el otro eslabón de la cadena donde se ubican las familias cultivadoras de coca? Estas múltiples dimensiones del traslape de las economías de las drogas y la tierra han tenido sus reflejos en el otro lugar de la cadena de la economía de las drogas compartiendo algunos rasgos pero también teniendo sus propias características.

La totalidad de la cocaína del mundo se produce en Colombia, Perú y Bolivia y concentra aproximadamente 213 mil hectáreas dedicadas a la hoja de coca. El último reporte de la UNODC señala que existen 170 mil hectáreas en Colombia, en un país que enfrenta una crisis productiva agrícola que se refleja en sus datos: 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, de las cuales 25 millones están dedicadas a pastos, 9 millones son rastrojos y 8 millones tienen uso agrícola.

Estas 170 mil hectáreas de coca le dan trabajo a aproximadamente 80 mil familias- de las cuales 54 mil están inscritas en el plan de sustitución de los

acuerdos de paz- y se ubican principalmente en Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Caquetá (Mapa 1).

Dos *territorios/momentos* del acaparamiento del sur de Colombia: de las *semillas del despojo* al *despojo consolidado*

El principal paisaje rural productivo del sur del país esta compuesto or la agroindustria, la coca y la ganadería y se han consolidado dos territorios/momentos: a. “Agroindustria consolidada” o el despojo consolidado en el Meta y Putumayo donde prevalece la agroindustria, la coca y la ganadería, y b. “Agroindustria en proceso de consolidación” o semillas del despojo, el Caquetá y Guaviare donde la coca y la ganadería son el principal motor pero todavía hay significativa proporción de bosques.

Putumayo y Nariño han sido los que han tenido más extensión de tierras dedicadas al cultivo de coca (Gráfica 1). Caquetá, Guaviare y Putumayo siguen siendo predominantemente territorios de bosques amazónicos, que comprenden por encima del 70% del área rural dispersa. Por el contrario, Meta ha transformado la mayoría de su territorio (56%) para el uso agropecuario y en segundo lugar Nariño (37%), este último por debajo del promedio nacional. El área agropecuaria está predominantemente dedicada a la ganadería o a actividades improductivas; el Caquetá, Guaviare y Meta dedican de su área productiva al 94%, 96% y 88% para pastos y rastrojos. En el Putumayo por ejemplo hay más rastrojos (54%) que pastos (33%). La preponderancia agrícola por encima de la ganadera solo ocurre en Nariño (Tabla 1, 2, 3).

En el área sembrada en estos territorios, Meta y Nariño dependen principalmente de cultivos agroindustriales. Putumayo tiene una alta representación de este tipo de cultivos pero también de la producción de tubérculos y plátanos. Esto contrasta con Caquetá y Guaviare donde las frutas, los cereales y los tubérculos son las principales apuestas productivas y los cultivos agroindustriales solamente representan el 19% y el 8.8% respectivamente.

Además del uso de la tierra, es importante recalcar la dinámica de la propiedad privada en el contexto colonizador reciente y de “la guerra contra las drogas”. Entre 1998 y 2010, hubo un amento de la propiedad privada en las

áreas rurales de estas regiones; en el Caquetá, el área en propiedad privada pasó de 14% a 23%, principalmente después del 2007 donde saltó de 16% a 22%. En números absolutos, pasó del 2007 al 2009 de 1 millón y medio de hectáreas a 1 millón 850 mil has; el número de predios de propiedad privada pasó de 22 mil a 27 mil y de propietarios de 21 mil a 23,500 entre el 2000 y 2009. El porcentaje de distribución de área rural en manos de la gran propiedad pasó de 21.85% a 26.45%. A pesar de que hay una consolidación de la mediana propiedad y estos procesos resultaron en un deterioro del coeficiente Gini en tierras y propiedad (IGAC, 2018).

El otro modelo de apropiación donde la agroindustria ya está consolidada es el del Meta, donde el porcentaje del área bajo propiedad privada disminuyó de 86% a 83% entre el 2000 y el 2009. El área en propiedad privada se mantuvo en 4 millones 800 mil aproximadamente; también se han mantenido relativamente constantes el número de predios de propiedad privada y el número de propietarios. No obstante, el porcentaje del área rural en manos de la gran propiedad es de 80%, lo que redunda en un coeficiente de Gini de propietarios y tierras que supera el 0.8 (IGAC, 2018).

Ambos modelos y ambos territorios, más que contrarios, refieren a dos momentos diferentes de la etapa de privatización de la propiedad privada en las áreas rurales; de ahí que consideremos la idea territorio/momento. Lo que se entiende como “la guerra contra las drogas” y los actuales procesos de deforestación, son parte de un camino de apropiación y acaparamiento territorial que viene de décadas atrás y se convierten en herramientas del despojo, donde el Caquetá y el Guaviare, una etapa atrás del proceso de consolidación de la agroindustria en comparación al Meta, aparecen como los territorios en disputa. La diferencia entre ambos- Caquetá y Guaviare- sería el papel de la enorme presencia de la ganadería en el primero, cuya relación con esta *agroindustrialización por despojo* aún debe profundizarse.

Es importante señalar los enormes conflictos ambientales que se han extendido por los contratos petroleros explotados en Putumayo y en el Meta, que generaron una guerra entre grupos armados y comunidades por la defensa o rechazo de estos proyectos extractivistas (CNMH 2015; Finzi 2017). En el Caquetá hasta hace pocos años inició la exploración y extracción, paradójicamente sin mayores reacciones por parte de las FARC, pero con

enorme rechazo de los y las campesinas que se movilizaron a lo largo del departamento (Ciro, E. 2017; Ciro, Barbosa & Ciro 2016).

Lo que muestra es el tipo de incentivos para la apropiación de la tierra que ha generado el estado colombiano en la colonización y la ejecución en el sur del país de la "lucha contra las drogas". Estos departamentos han sido priorizados para las operaciones militares y sociales del Plan Colombia y la transformación rural ha resultado en la praderización y destrucción de la soberanía alimentaria. El daño a la biota andino amazónica, amazónica y de altillanura ha sido nefasto; por ejemplo, una de las preocupaciones recientes en el rompimiento de la conexión andino amazónica – el corredor amazónico- puede destruir uno de los lugares de "creación" de biodiversidad (Clerici, Salazar, Jiggins & Linares 2018; Hazzi, Moreno, Ortiz-Movliav, Palacio, 2018).

No obstante hay matices en la manera en que se han consolidado las inversiones extranjeras agroindustriales y extractivas en estos territorios – en las dos áreas mencionadas-. En el actual contexto de reincorporación de la insurgencia, se han acelerado fenómenos como la deforestación que es importante señalar, pero cuyo análisis no se puede reducir solamente a la presencia o ausencia del actor armado no estatal.

Control, uso y despojo de tierras: consecuencias de la "lucha contra las drogas".

Dos casos son importantes resaltar en la incubación del proceso de consolidación de la agroindustria que supone un paso central para el avance de este modelo. Los datos de adjudicaciones de tierras baldías por departamento muestran que el Caquetá y Meta han tenido mayor distribución de área adjudicada a nivel nacional. En el Meta, el 45% del departamento ha sido adjudicado, e Putumayo el 19.9% y el Caquetá el 19%, Guaviare el 4.4% y Nariño el 11.6%. Según la Contraloría General de la Nación, la cuantificación de la adjudicación ilegal de baldíos en la Altillanura es de 101.108,57 hectáreas, adquiridas por valor total de 150 millones de pesos – aproximadamente 50 mil dólares- por 14 entes jurídicos o personas naturales violando la ley entre ellas grandes transnacionales y los mayores capitales del país, como Riopaila, Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, Manuelita

Yopal, Manuelita San Martín, Camilo Pabón, Poligrow, entre otros (Contraloría General de la Nación 2017; Finzi, 2017).

Otro proceso de acaparamiento de tierras que ocurre en el periodo 1996-2006 en el Caquetá pasa desapercibido en el contexto de la "guerra contra las drogas". Según el Centro de Memoria Histórica entre 1996 y 2006 ocurre la adjudicación a 12 personas de propiedades mayores a 1000 hectáreas, una cifra que supera las adjudicaciones a gran propiedad a lo largo del siglo XX en el departamento, donde el máximo alcanzado había sido de 6 en el periodo 1975-1988 (CNMH 2017). A estas 12 personas se les adjudicó aproximadamente 25 mil hectáreas en el departamento (Gráfica 5).

Con estos precedentes de acaparamiento de tierras, la región pasó del Plan Colombia al denominado pos – Plan Colombia (2012- en adelante). La mayoría de los análisis sobre la situación actual y la transición a la reincorporación a la vida civil de las FARC refieren a un periodo anterior que no arrastra herencias sobre el presente, es decir, que este presente se construye sobre un pasado que no existe o unas tensiones y contradicciones sobre la tierra, la guerra y la estructura económica que "ya se han superado".

El nivel de deforestación actual en estos departamentos según el IDEAM pasó de un millón doscientos mil hectáreas en la Amazonia entre 1990-2000 a un millón de hectáreas entre 2000-2010. Mientras tanto, en la Orinoquía aumentó ligeramente pasando de 900 mil hectáreas a poco menos de un millón en los mismos periodos señalados. En el país, la principal función transformadora de la deforestación fue la expansión de pastos, en segundo lugar vegetación secundaria y tercero el área agrícola. En la Amazonia primó este proceso de praderización que resultó en el fortalecimiento de la ganadería y entre 2005 y 2010, la deforestación disminuyó en la región. (Perspectivas, 2014). En los años posteriores, los datos del monitoreo de coberturas del SINCHI muestran el aumento de las tasas medias anuales de pérdida de bosque, de praderización y de degradación de bosque entre los periodos 2007-2012 y 2012-2014 en los cinco departamentos estudiados Caquetá, Meta, Putumayo, Guaviare y Nariño que muestran (Gráfica 2, 3, 4)

Según los boletines de deforestación del IDEAM del 2018, se identifican cuatro núcleos de deforestación en la zona de nuestra investigación: Parque Nacional Natural Tinigüa, Ríos Yari y Caguán, Río Caguán y Suroccidente de

Meta (IDEAM 2018 a; 2018 b), parte del área incluida por la construcción de la Marginal de la Selva – una vía que pertenece a la Iniciativa de Infraestructura Regional de Sur América –IIRSA- (Florez, 2007).

Es así que el fenómeno de la deforestación reciente se centra en el departamento del Caquetá, Guaviare y sur del Meta, principalmente la subregión que señalamos anteriormente como regiones de agroindustria no consolidadas pero en proceso de expansión, y también en el corredor andino amazónico. A la luz de procesos temporalmente amplios de acaparamiento de tierras, este fenómeno refiere al proceso de "agroindustralización" de la selva amazónica, sobre territorios que han sido adjudicados o dinámicas de adjudicación que se aprovechan del colonizador para después despojarlo.

El análisis del despojo y acaparamiento de tierras no estaría completo sin mencionar la estrategia de la aspersión aérea de glifosato en la "guerra contra las drogas". Desde la década del noventa, "las fumigaciones" han sido utilizadas en el sur del país, y su rechazo desató una de las principales movilizaciones campesinas del siglo XX en Colombia, las marchas campesinas cocaleras en 1996, que tuvieron como epicentro Putumayo, Guaviare y Caquetá y movilizaron alrededor de 200 mil campesinos (Ramírez 2011). Semanas de confrontación con las fuerzas armadas, desaparecidos y muertos, son el recuerdo de estas marchas. "Las fumigaciones" se convirtieron en la estrategia principal de la "lucha contra las drogas" del Plan Colombia, asperjando 1 millón de hectáreas en el país, con resultados críticos sobre la salud humana y la biota andino-amazónica y amazónica. En el 2015, durante las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, se suspendieron las aspersiones de glifosato como medida de prevención ante el posible daño a la salud, y en el 2016 se priorizó la erradicación manual forzada como estrategia de destrucción de cultivos, con consecuencias nefastas como la masacre de Tumaco el 5 de Octubre del 2017, cuando fueron asesinados por la policía anti-narcóticos un número indeterminado de campesinos y campesinas y otros aún siguen desaparecidos (Gráfica 6).

El impacto de las aspersiones no solo es su ineficacia en la disminución de cultivos de coca o los nefastos daños de este químico sobre la salud humana y la biota regional, sino también los incentivos perversos sobre los cuales se sostiene la estrategia de aspersión que resulta en el desplazamiento

de las familias campesinas, la crisis familiar sobre campesinos y campesinas que pierden todo más de dos veces en su vida a raíz de las aspersiones aéreas, la falta de garantías institucionales y procedimientos que promuevan los derechos humanos, la posibilidad de defenderse o de lograr la reparación a las familias que denuncian daños y consecuencias de la lluvia de químicos (Lyons 2017). Además el empobrecimiento rural de una colonización del estado dirigida hacia la gran propiedad y la "lucha contra las drogas", la aspersión de glifosato – aéreo o manual- crea el incentivo para la persistencia de cultivos de uso ilícito, promoviendo la movilidad de las familias campesinas, que extiende la deforestación y el uso de químicos contaminantes para el procedimiento de cultivo y procesamiento y que tiene consecuencias destructoras de la productividad de las tierras amazónicas (Ciro 2016).

Lo que hace esta estrategia es aumentar el nivel de vulnerabilidad y riesgo de las familias campesinas, no por ser cultivadoras de coca, sino por ser pobladoras de tierras en una dinámica de apropiación de gran propiedad, despojo y praderización, causantes de la baja productividad de la mediana y pequeña propiedad en el sur del país y la destrucción de la soberanía alimentaria.

Riesgos Existenciales

¿Contra las drogas o por las tierras? En 1961, la Convención de Estupefacientes puso la meta de que en 25 años desapareciera la coca / cocaína del planeta. Tras poco más de 40 años de política prohibicionista de drogas en América Latina, y ante el aumento sin precedentes de los cultivos de coca en Colombia desde el 2012, podemos decir que todas las estrategias llevadas a cabo han fallado, que el objetivo no tiene sentido en un mundo en el que persiste la demanda cocaína y que "la guerra contra las drogas" se ha convertido al lado de "la guerra contra el terrorismo" en el justificante de la violación de los derechos humanos y a la salud de miles de personas a lo largo y ancho del planeta. Por el contrario, el resultado tras décadas en el sur de Colombia ha sido la expansión de la propiedad privada en territorios baldíos, cuya dinámica tiende a la concentración de la gran propiedad, al establecimiento de la ganadería y la agroindustria.

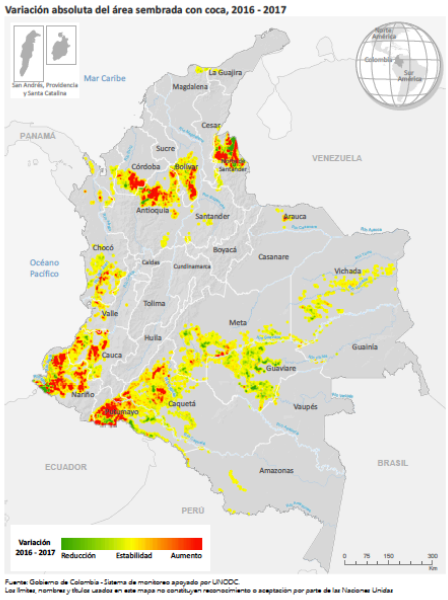
La política contra las drogas tal cual la conocemos hasta ahora es un motor de destrucción sobre territorios sumamente frágiles e importantes para el mantenimiento de la vida en el planeta. Genera debilidad en el control de recursos importantes como el agua e incentiva la destrucción ecosistemas aceleradamente, promoviendo el acaparamiento por parte de privados, la praderización y peor, el enrastrojamiento de bosques y selvas. La expansión de intereses del capital sobre territorios que no hacían parte de la dinámica capitalista de manera directa reproduce las consecuencias de la expansión del mercado, la instauración del modelo de la propiedad privada y la destrucción de la biota.

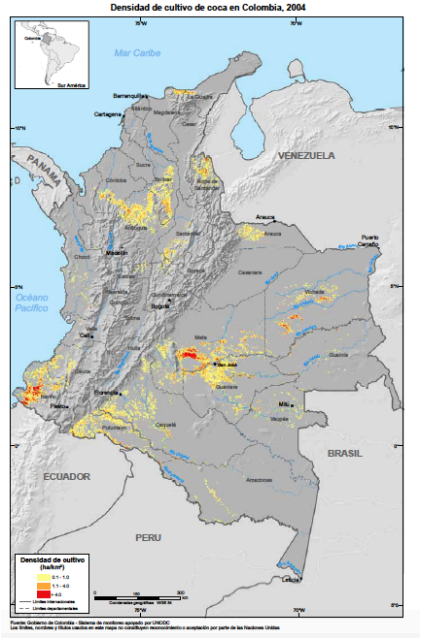
No obstante, el sur del país no es homogéneo y los procesos de avance de la *ganaderización* o *agroindustrialización por despojo* no son los mismos. Una etapa de consolidación la experimentan el Meta y Putumayo, mientras Guaviare y el Caquetá están en un momento anterior de incubación de las condiciones de expansión de la agroindustria, aunque en el último, la ganadería se ha convertido en el bastión de la propiedad privada y la concentración de tierras en el departamento. A diferencia de lo que señala la literatura, la colonización no es un proceso natural con fuerza propia de "emprendimiento rural", sino está dirigido por el Estado, aún en la omisión, creando las condiciones para el empobrecimiento de las pequeñas familias campesinas a favor de la gran propiedad. "La lucha contra las drogas" es una herramienta que aceita este despojo, lo hace posible.

Un mercado regulado no solo protege al consumidor y a las poblaciones productores de que sus derechos sean violados y de los riesgos hacia la salud sino también podría reorganizar los procesos de producción rural hacia dinámicas más equitativas, que se basen en la protección de la vida y la regulación de recursos claves para el mantenimiento de la vida en áreas locales pero también a nivel global. También, desmontaría el sistema que arrebata la productividad a las tierras campesinas, a partir de su estigmatización, persecución y dictadura del hambre.

Anexos

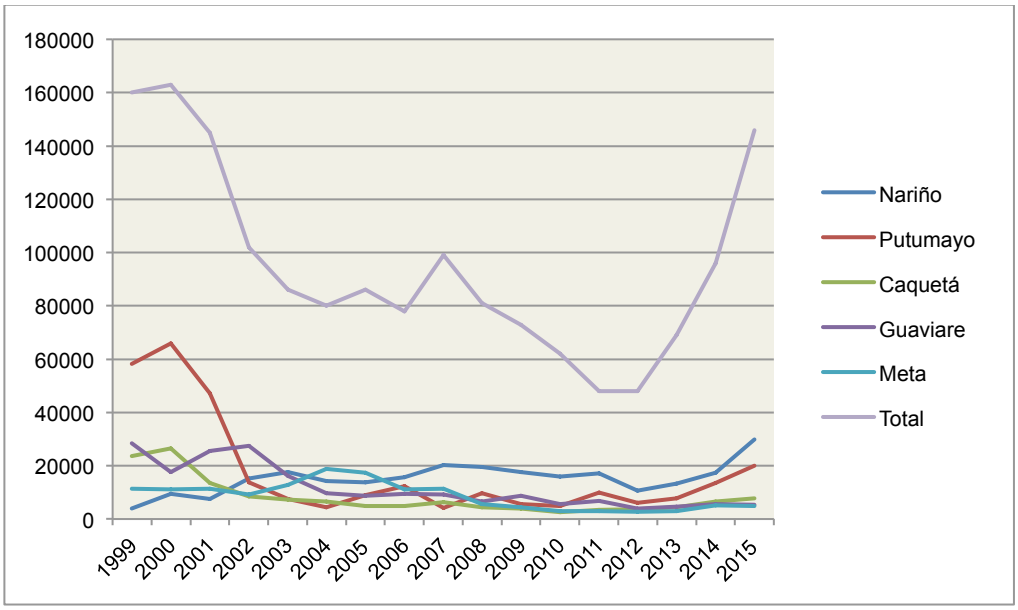
Mapa 1. Cultivos de coca en Colombia, 2004 y 2017.





Fuente: Simci 2005, 2018.

Gráfico 1. Cultivos de uso ilícito en Caquetá, Guaviare, Nariño, Meta y Putumayo, 1999-2016.



Elaboración propia. Fuente: SIMCI 2016

Tabla 1. Usos y tamaño del área rural dispersa en los territorios cocaleros del sur de Colombia.

	Área total rural dispersa	Área en bosques	%	Área con uso agropecuario	%	Área con uso no agropecuario	%	Área con otros usos y cobertura de la tierra	%
Colombia	111,452,998	63,213,574	57	43,024,740	39	2,459,663	2	2,754,021	2
Caquetá	7,953,374	6,180,706	78	1,574,390	20	105,183	1	93,095	1
Guaviare	5,581,118	4,957,334	89	574,599	10	21,132	0	28,053	1
Meta	8,533,218	3,473,611	41	4,800,732	56	152,428	2	106,447	1
Putumayo	2,454,813	1,747,700	71	644,871	26	46,341	2	15,901	1
Nariño	3,115,196	1,811,778	58	1,158,505	37	44,938	1	99,975	3

Elaboración propia. Fuente: CNA 2014.

Tabla 2. Dedicación de las áreas de uso agropecuario.

	Área con uso agropecuario							
	Área en pastos	**%**	**Área en rastrojo**	**%**	**Área agrícola**	**%**	**Área en infraestructura agropecuaria**	**%**
Colombia	24,979,933	58	9,628,689	22	8,476,711	20	121,407	0.3
Caquetá	1,092,223	69	390,939	25	90,658	6	570	0.0
Guaviare	408,884	71	141,220	25	24,232	4	260	0.0
Meta	3,688,831	77	537,394	11	566,913	12	7,593	0.2
Putumayo	215,564	33	347,251	54	81,470	13	587	0.1
Nariño	332,157	29	121,580	10	703,447	61	1,321	0.1

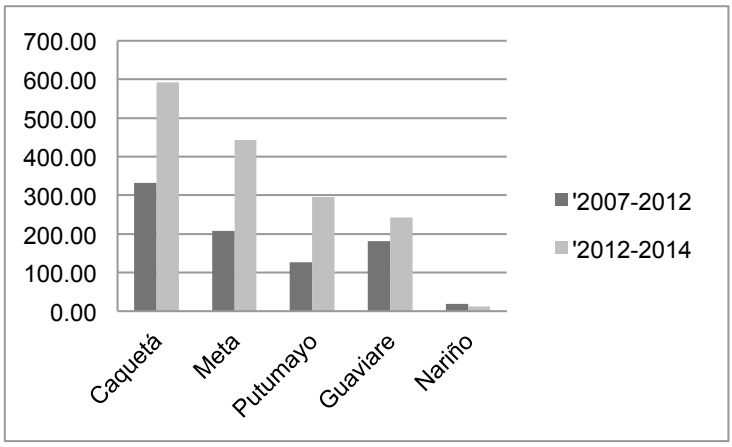
Elaboración propia. Fuente: CNA 2014.

Tabla 3. Distribución porcentual del tipo de actividad agrícola en área total sembrada.

Lugar	Agro-industriales	Tubérculos y plátanos	Cereales	Frutas	Plantaciones Forestales	Hortalizas, verduras y legumbres	Plantas aromáticas y medicinales	Flores y Follajes
Colombia	35.1	22.3	16	14.6	6.8	4.2	0.8	0.2
Caquetá	19	37.7	10.6	26.8	1.6	3.9	0.4	0.1
Guaviare	8.8	26.3	23.9	35.1	2.2	3.5	0.3	0
Meta	44.8	18.8	23.3	4.6	2.2	3.6	2.6	0
Putumayo	32.8	35.5	15.2	10.9	2.5	2.8	0.2	0.1
Nariño	30.6	29.9	7.9	18.7	1.9	10.8	0.2	0

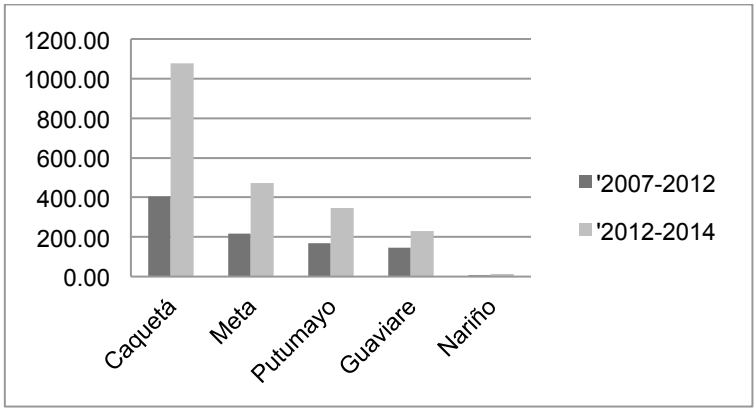
Elaboración propia. Fuente: CNA 2014.

Gráfica 2. Tasa media anual de pérdida de bosque (km2/año)



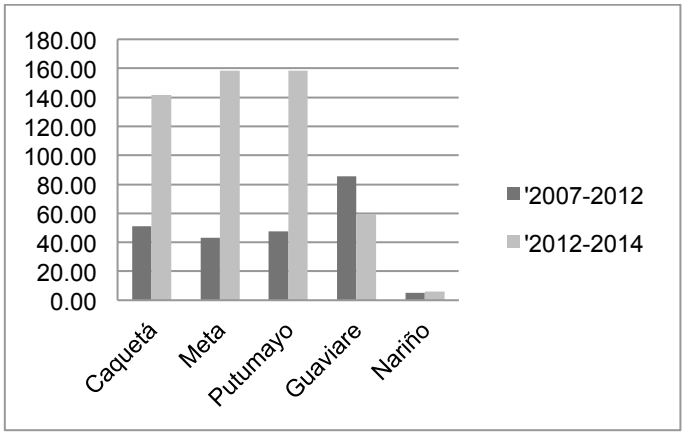
Elaboración propia. Fuente: Murcia, Medina, Hernández, Herrera, Castellanos 2014; Murcia García, Gualdrón, Londoño 2016

Gráfica 3. Tasa media anual de praderización (km2/año)



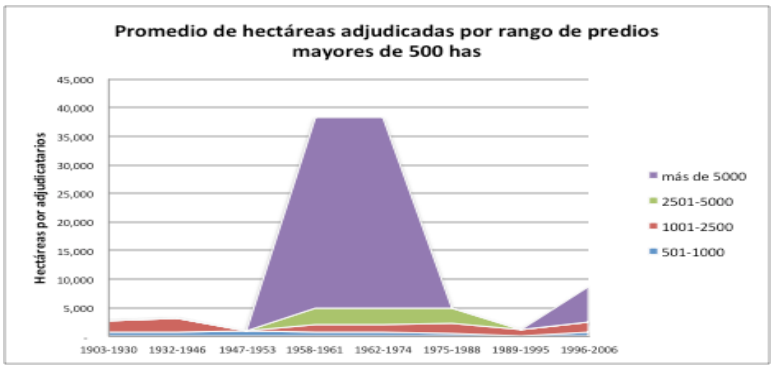
Elaboración propia. Fuente: Murcia, Medina, Hernández, Herrera, Castellanos 2014; Murcia García, Gualdrón, Londoño 2016

Gráfica 4. Tasa media anual de degradación de bosque (km2/año)

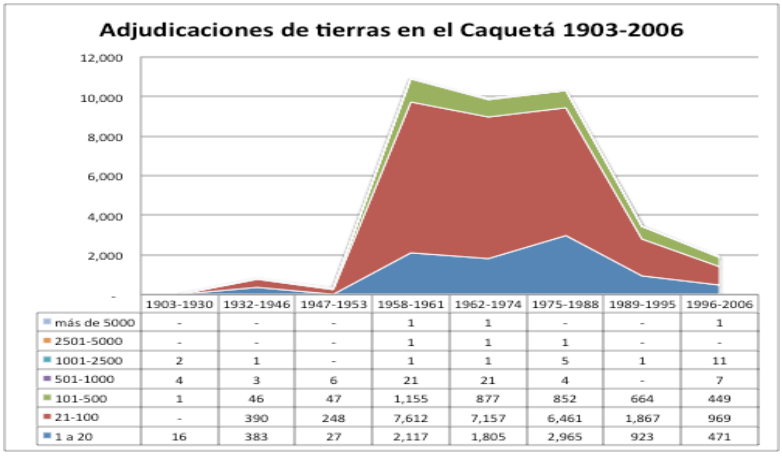


Elaboración propia. Fuente: Murcia, Medina, Hernández, Herrera, Castellanos 2014; Murcia García, Gualdrón, Londoño 2016

Gráfica 5. Dinámicas de Adjudicaciones en el Caquetá

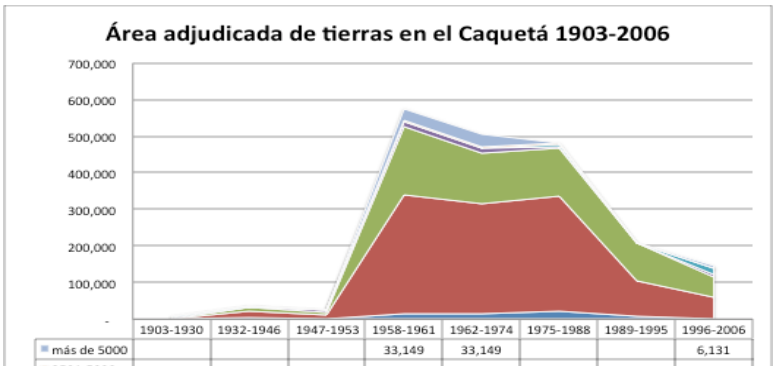


Elaboración propia: Fuente CMNH 2017.



	1903-1930	1932-1946	1947-1953	1958-1961	1962-1974	1975-1988	1989-1995	1996-2006
más de 5000	-	-	-	1	1	-	-	1
2501-5000	-	-	-	1	1	1	-	-
1001-2500	2	1	-	1	1	5	1	11
501-1000	4	3	6	21	21	4	-	7
101-500	1	46	47	1,155	877	852	664	449
21-100	-	390	248	7,612	7,157	6,461	1,867	969
1 a 20	16	383	27	2,117	1,805	2,965	923	471

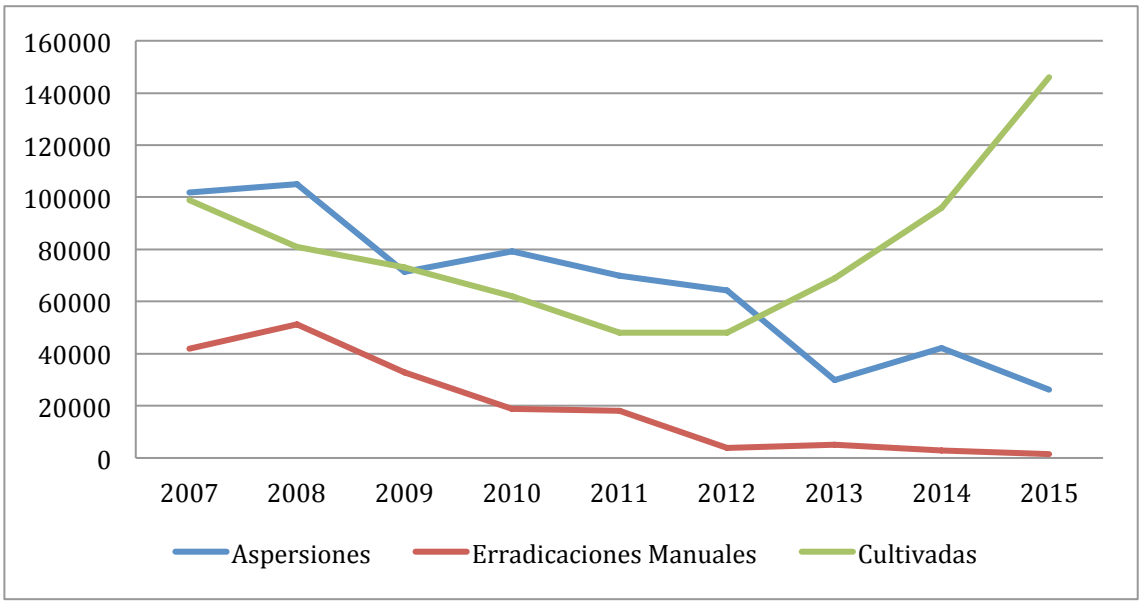
Elaboración propia: Fuente CMNH 2017.



	1903-1930	1932-1946	1947-1953	1958-1961	1962-1974	1975-1988	1989-1995	1996-2006
más de 5000				33,149	33,149			6,131
2501-5000				2,999	2,999	2,671		
1001-2500	4,294	2,500		1,388	1,388	7,970	1,189	19,685
501-1000	2,698	2,159	5,289	13,672	13,672	2,488		4,635
101-500	202	9,411	7,578	185,244	137,224	133,500	102,694	56,377
21-100	-	16,989	11,692	323,797	301,600	312,874	96,696	56,523
1 a 20	316	5,130	232	15,495	15,080	21,473	7,595	2,832

Elaboración propia: Fuente CMNH 2017.

Gráficas 6. Aspersiones, erradicaciones y hectáreas cultivadas de coca.



Bibliografía

Clerici, N., Salazar, C., Pardo-Díaz, C., Jiggins, C. R., & Linares, M. (June de 2018). Peace in Colombia is a critical moment for Neotropical connectivity and conservation: Save the northern Andes-Amazon biodiversity bridge. *Conservation Letters.*

Lai, G. (2012). Drogas, crimen y castigo. *Serie reforma legislativa en materia de drogas No. 20* .

Ceballos, G., Ehrlich, P., & Dirzo, R. (July de 2017). Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. *PNAS* , 89-96.

Ceballos, G., Ehrlich, P., Barnosky, A., Garcia, A., Pringle, R., & Palmer, T. (2015). Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sicth mass extinction. *Science Advances* (1).

Ciro, A., Barbosa, J., & Ciro, E. (2016). El mapa petrolero en el territorio amazónico y la resistencia a su imposición en el Caquetá: los retos de la paz en el marco del pos-conflicto. En S. CORONADO, & A. ULLOA,

Extractivismos y posconflicto en Colombia: Retos para la paz territorial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, CINEP. .

Ciro, E. (2016). *Cultivando coca en el Caquetá: vidas y legitimidades en la actividad cocalera.* Ciudad de México, México: Tesis. Programa de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

Ciro, E. (2017). Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima, incursión petrolera y defensa del agua durante las negociaciones y la firma de la paz en el sur de Colombia. *Colombia Internacional* (93), 147-178.

CNMH. (2017). *La tierra no basta. Colonización, conflicto y organizaciones sociales en el Caquetá.* Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

CNMH. (2015). *Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo.* Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá: CNMH.

Contraloría General de la Nación, C. (2017). *Contraloría General de la Nación.* Obtenido de Acumulación de Predios Baldíos en la Altillanura Colombiana: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/703164/Inf_Baldios_pub2017.pdf/fc83b206-c806-414e-a253-6bf355b01ccf

Lyons, K. (2017). Guerra química en Colombia, ecologías de la evidencia y sentir-actuar prácticas de justicia. *Universitas Humanistica* (84), 203-234.

Arenas, N., & Vélez, J. (5 de Julio de 2017). *El impacto ambiental de las FARC*. (L. s. vacía, Productor, & La silla vacía) Recuperado el 2018 de 10 de 6 , de La silla vacía: https://lasillavacia.com/historia/el-impacto-ambiental-de-la-salida-de-las-farc-61592

Dewey, M. (2015). *El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina. .* Argentina: Katz Editores.

Enciso, F. (2016). *Los reclamos de justicia de las víctimas como política de Estado. El daño social de las regulaciones sobre drogas en México. .* Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

Florez, M. (09 de Febrero de 2007). *La IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional de Sur América)*. Obtenido de Semillas: http://www.semillas.org.co/es/la-iirsa-iniciativa-de-infraestructura-regional-de-sur-amrica

Finzi, G. (2017). El caso de Poligrow en Mapiripán, Meta: entre acaparamiento (ilegal) de tierras y capitalismo verde. *Ciencia Política , 12* (24), 21-50.

Harvey, D. (2004). *El "nuevo" imperialismo. Sobre reajustes espacio temporales y acumulación mediante desposesión*. Obtenido de Herramienta debate marxista: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-27/el-nuevo-imperialismo-sobre-reajustes-espacio-temporales-y-acumulacion-medi

Harvey, D. (2004). *SocialistRegister.* Obtenido de El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión: http://socialistregister.com/index.php/srv/article/viewFile/14997/11983

Hazzi, N. M., Ortiz-Movliav, C., & Palacio, R. D. (Julio de 2018). Biogeographic regions and events of isolation and diversification of the endemic biota of the tropical Andes. *Proceedings of the National Academy of sciences of the United States of America* .

Hibou, B. (2013). *De la privatización de las economías a la privatización de los estado.* México: Umbrales.

IDEAM. (2018). *Décimo Quinto Boletín de Alertas Tempranas de Deforestación (AT-D) Segundo Trimestre de 2018.* Obtenido de IDEAM: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023836/15_BOLETIN-alertas.pdf

IGAC. (2012). *Atlas de la Distribución de la Propiedad.* Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

McSweeney, K., Nielsen, E., Taylor, M., Wrathall, D., Pearson, Z., Wang, O., y otros. (2014). Drug Policy as Conservation Policy: Narco-deforestation. *SCIENCE , 343*, 489-490.

McSweeney, K., Richani, N., Pearson, Z., Devine, J., & Wrathall, D. (2017). Why do narcos invest in rural land. *Journal of Latin American Geography , 16* (2), 3-29.

Murcia García, U., Gualdrón, A., & M., L. (2016). *Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana a escala 1:100.000. Cambios multitemporales en el periodo 2012 al 2014 y coberturas del año 2014.* Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Bogotá.

Murcia García, U., Medina Lozano, R., Rodríguez Rondón, J. M., Hernández Anzola, A. M., Herrera Rodríguez, E. V., & Castellanos Quiroz, H. O.

(2014). *Monitoreo de los bosques y otras coberturas de la Amazonia colombiana, a escala 1:100.000.* Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, Bogotá.

Pérez Correa, C., & Youngers, C. (2014). *En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina.* Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CIDE.

Perspectivas, D. e. (2014). *Fedesarrollo Colombia.* Obtenido de Fedesarrollo Colombia : https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/337/KAS%20SOPLA_Deforestacion%20en%20Colombia%20retos%20y%20perspectivas.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ramírez, M. C. (2011). *Between the guerrillas and the state. The cocalero movement, citizenship, and identity in the Colombian Amazon.* (Kindle ed.). Durham - London: Duke University Press.

Silva Forné, C., Pérez Correa, C., & Gutiérrez Rivas, R. (2012). Uso de la fuerza letal. Muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos de las fuerzas federales con presuntos miembros de la delincuencia organizada. *Desacatos* (40), 47-64.

Trimestre, D. c.-D. (2018). *IDEAM.* Obtenido de IDEAM: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023779/Boletin_14.pdf

Vélez, J. (10 de Enero de 2018). *Sin FARC y con disidencias, la deforestación se disparó en el Caguán*. (L. S. Vacía, Productor) Obtenido de La Silla Vacía: https://lasillavacia.com/silla-sur/sin-farc-y-con-disidencias-la-deforestacion-se-disparo-en-el-caguan-63881